

Santiago de Cali, 21 de diciembre 2021

Señores

CONSEJEROS HONORABLE CONSEJO DE ESTADO.

B . D. C.

REF: Acción de tutela por Vía de Hecho Judicial de ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO, MERY LUCIA ERASO VARGAS, YINETH CAROLINA PULIDO ERASO, contra TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA SEGUNDA DE DECISION ORAL.

ANDRÉS FELIPE RIVAS JIMÉNEZ, mayor de edad, vecino de Cali (V), identificado con cédula de ciudadanía número 6.333.916 expedida en Jamundí (V), abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 178.466 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en condición de apoderado judicial de **ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO**, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16'671.1332 de Cali (V), **MERY LUCIA ERASO VARGAS**, mayor de edad, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66'953.833 de Cali (V) y **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO**, mayor de edad, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.005'877.684 de Cali (V), según memoriales poderes especiales adjuntos, atentamente manifiesto a Ustedes que por medio del presente escrito interpongo **ACCIÓN DE TUTELA** en contra de la autoridad judicial, señores **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA SEGUNDA DE DECISION ORAL, MAGISTRADOS DOCTOR RONALD OTTO CEDEÑO BLUME (PONENTE), DOCTOR JHONK ERICK CHAVES BRAVO, DOCTOR FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ**, mayores de edad y vecinos de Cali en su condición de sala titular del mencionado Órgano Judicial Colegiado o por quien haga sus veces al momento de la notificación del auto admisorio de la acción superior con el fin de que se ordene en fallo de tutela la protección inmediata de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad procesal, como unos principios constitucionales, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia, observancia de la plenitud de las formas propias del proceso contencioso administrativo, justicia material, respeto por el precedente judicial y/o unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado sección tercera, reconocimiento de

los derechos sustanciales de la parte accionante en un proceso judicial administrativo distinguido con radicación **760013340021201700048-01**, entre otros vulnerados por la decisión judicial en sentencia sin número de fecha 30 de Junio de 2023 con la que se fulminó a través de evidentes vías de hecho proferidas por el accionado en aquella por defectos: sustantivo, fáctico, por no valoración probatoria o por valoración probatoria arbitraria, por violación a precedentes judiciales y/o sentencia de unificación por estar dicho fallo directamente vulnerando la Constitución Política en materia de debido proceso probatorio, observancia de la plenitud de las formas propias del proceso, entre otros, dentro del proceso de reparación directa instaurado en el municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Distrito Judicial de Cali, Juzgado 21 Administrativo de esa misma ciudad, por los actores en contra de las **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. EMCALI** acción administrativa judicial identificada con número de **radicación 760013340021201700048-01**.

A efectos expositivos y de argumentación de la tutela que se interpone, así como de las órdenes que más adelante se solicitan, procederé de la siguiente manera:

1. Hago una presentación del petitum de la acción, así como de las tesis que sustento y argumento en sede constitucional;
2. Hago y presento una reconstrucción de los hechos que dieron origen a la acción y que configuraron las vías de hecho denunciadas;
3. Hago la demostración de la tesis uno por existencia de defecto sustantivo y fáctico por valoración arbitraria (acción valorativa contraevidente).
4. De las teorías de las vías de hecho. Procedencia de tutela contra providencias judiciales.
5. Demuestro la procedencia de la acción de tutela por inexistencia de otro medio ineficaz de defensa;
6. Viabilidad procesal de la acción de tutela.
7. De las ordenes a ser impartidas.
8. Juramento.
9. Competencia.
10. Fundamentos de derecho.
11. Anexos.
- 12.** Notificaciones y direcciones.

I. DEL PETITUM

Respetuosamente solicito al despacho se sirva ordenar la protección de los siguientes derechos fundamentales:

1.- Conforme a los hechos expresados, comedidamente solicito a la corporación Constitucional proceder al amparo de los derechos constitucionales fundamentales de los señores **ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO, MERY LUCIA ERASO VARGAS, YINETH CAROLINA PULIDO ERASO**, al debido proceso, defensa, igualdad procesal, como unos de los principios constitucionales, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia, propendiendo por una decisión materialmente justa para las víctimas. En consecuencia declarar en sede de tutela que en el presente caso se ha presentado la configuración de una vía de hecho judicial por defecto sustantivo, procedimental absoluto, fáctico, violación de precedentes judiciales del Consejo de Estado sección tercera ocasionados con la emisión de la sentencia de segunda instancia sin numero de fecha 30 de Junio de 2023 emitida por la sala segunda de decisión oral del tribunal administrativo del Valle del Cauca se confirma la sentencia No. 057del 18 de , Mayo de 2021 proferida por el juzgado 21 administrativo oral del circuito de Cali, condenando en costas.

2.- En consecuencia, pido a la honorable corporación se decrete la nulidad de la sentencia de segunda instancia sin numero de fecha 30 de Junio de 2023 emitida por la sala segunda de decisión oral del tribunal administrativo del Valle del Cauca referida en el numeral precedente y se le ordene al tribunal administrativo del Valle del Cauca sala de decisión oral que dicte una nueva sentencia atendiendo a los derechos sustanciales vulnerados a la parte accionante en esta acción de tutela. En la nueva decisión deberán ser tenidas en cuenta las consideraciones sobre la correcta aplicación de la teoría del riesgo excepcional de la sección tercera del Consejo de Estado, la aplicación de las normas legales que regulan el tema y valoración probatoria legal o ajustada a la realidad.

3.- A efectos del cumplimiento del fallo de tutela se les fijará y concederá a los Magistrados aquí accionados, un plazo a la autoridad judicial accionada de un máximo de 48 horas para que se proceda de conformidad con el cumplimiento de la acción de tutela aquí solicitada. Esta orden es la consecuencia de la declaratoria de vía de hecho judicial por los diferentes defectos denunciados en la presente acción de tutela.

II. DE LOS HECHOS

1. **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** nació el día 11 de diciembre de 2.000 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, identificada con tarjeta de identidad N°1005877684.
2. **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** hija de **ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO** y **MERY LUCIA ERASO VARGAS**, residía en la dirección calle 83 # 26p-04 del barrio Alfonso Bonilla Aragón, de esta ciudad. Siendo esta propiedad una casa esquinera.
3. El día 29 de noviembre de 2015, **YINETH CAROLINA** se encontraba realizando los quehaceres diarios dentro de la casa en la cocina por la carrera 26p cuando al manipular las cortinas de la cocina el tubo que soporta la cortina se acercó a la línea primaria de 13.000 kilovatios (siendo este el cable de más alta tensión) que se encontraba a Un metro con veintitrés (1.23m) de distancia del inmueble por la carrera 26p vulnerando la norma eléctrica RETIE que estipula que la distancia debe ser de dos metros con treinta (2.30m) generando proximidad de la red eléctrica a la propiedad ubicada en la calle 83 # 26p-04 sobre la carrera 26p donde sucedió el accidente de **YINETH CAROLINA** debido a esta anomalía que presenta la red de vulnerar la distancia mínima de seguridad establecida por la norma eléctrica el tubo de la cortina alcanza hacer contacto con el arco eléctrico (intensidad de calor y presión) que genera la línea primaria de 13.000 voltios produciéndose explosión eléctrica que le causó graves

quemaduras en el cuerpo a la electrizada **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** provocándole serias quemaduras en sus extremidades, abdomen y espalda de primer, segundo y tercer grado a quien para la época del siniestro era menor de edad.

4. Inmediatamente la menor fue llevada al centro de salud Carlos Holmes Trujillo donde le brindaron los primeros auxilios, dirigiéndose a la clínica amiga el mismo día del siniestro estando dos (2) días en clínica Amiga ya que fue remitida para el hospital universitario de Cali en donde fue intervenida.
5. Ingresó al Hospital Universitario del Valle el día 30 de noviembre de 2015, donde le practicaron varios procedimientos quirúrgicos (Escarectomía) debido a las quemaduras eléctricas grado II y III profundas del 18% del área corporal, dado el daño que sufrió el tejido de la piel, tuvieron que realizarle unos injertos de piel de su muslo izquierdo para reconstruirle el codo y antebrazo izquierdo a **YINETH CAROLINA** quedándole cicatrices en su cuerpo para toda la vida que la atormentan cada que las mira.
6. El día 11 de diciembre de 2015, **YINETH CAROLINA** cumplió sus quince (15) años de edad en la Unidad De Quemados Del Hospital Universitario del Valle, con quemaduras extensas y profundas GII en el 18% de su cuerpo. Teniendo como plan del día una Escarectomía, Terapia Física, Ocupacional, intervención del Trabajo Social y Valoración con Fisiatría.
7. El día 15 de diciembre de 2015 le dan de alta a la menor, con sus respectivas recomendaciones.
8. Los señores **ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO, MERY LUCIA ERAZO VARGAS** padres de **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO, LA ELECTRIZADA**, los señores **BETTY EMELDA ERASO VARGAS** y **CHRISTIAN DAVID ERASO ARENAS**, mediante apoderado judicial promueven el

medio de control de reparación directa contra las **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E.**, por los perjuicios morales y materiales generados por las lesiones causadas a **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** el 29 de noviembre de 2015 con ocasión al accidente eléctrico generado por las fallas administrativas del operador de red **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E.**, correspondiéndole por reparto al Juzgado 21 administrativo de oralidad de Santiago de Cali (V).

9. Las **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI E.I.C.E.**, se opuso a las súplicas de la demanda, al señalar que no existe determinación clara, expresa e inequívoca de la responsabilidad que se pretende declarar, por lo que no procede el reconocimiento e indemnización a su cargo. Advirtió que al instalar la infraestructura eléctrica del sector de la calle 83 No. 26 P 04 del barrio Alfonso Bonilla Aragón de Cali se cumplieron con los parámetros y distancias de seguridad de acuerdo con los diseños y planos que para la época fueron proyectados.
10. No obstante, el Juzgado 21 administrativo de oralidad de Santiago de Cali en sentencia No. 057 del 18 de mayo de 2021, consideró que el día en que se lesionó **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** se encontraba sola en un espacio cerrado, lo que no permitía inferir la inexistencia de testigos, tampoco estuvo acreditado que los demandantes hubieran acudido a **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** para notificar la ocurrencia del desafortunado suceso. Así pues, concluyó que no hay manera de atribuir responsabilidad estatal por falta de prueba sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos como generadores del daño, concretamente, el acercamiento del tubo de cortina que se indicó manipulaba la menor **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** hacia la ventana de su residencia, colindante con las redes eléctricas.

11. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que conocido el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA SEGUNDA DE DECISION ORAL, MAGISTRADOS DOCTOR RONALD OTTO CEDEÑO BLUME (PONENTE), DOCTOR JHONK ERICK CHAVES BRAVO, DOCTOR FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ.**
12. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, al considerar que la parte demandante tenía la carga procesal de acreditar que la configuración del daño sufrido se debió a una causa atribuible a la entidad demandada, situación que no ocurrió en el presente asunto entre otros.
13. Notificada la decisión de segunda instancia y dentro de término oportuno, el apoderado de la parte actora, interpuso recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
14. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL niega recurso interpuesto por considerar que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia mediante el auto sin numero de fecha 7 de Diciembre de 2023, manifestando que el recurso de unificación de jurisprudencia procede en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en única o en segunda instancia. La mencionada disposición normativa señala, además que tratándose de sentencias proferidas en los procesos de reparación directa, el recurso resulta procedente cuando la cuantía de la condena o el valor de las pretensiones sea igual o superior a 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuantía que no supera dicha suma. resolviendo NO CONCEDER el recurso de unificación de jurisprudencia.
15. La prestación del servicio de electricidad es catalogada como una actividad de alto riesgo por lo

que el régimen aplicable es de carácter objetivo ya que el transporte de electricidad expone a los administrados a un riesgo grave anormal por lo que entonces el daño es imputable a la administración en el caso en concreto **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP** quien es la encargada de operar la red eléctrica que causo el siniestro de **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** quien para la época del siniestro era menor de edad.

16. En casos similares al presente asunto, el Consejo de estado, sección tercera, expediente 2000-N11842_1 en Sentencia de unificación (CE-SEC3-EXP2000-N11842_1) la cual expresa lo siguiente:

“A partir de la expedición de la nueva Constitución Política, todo debate sobre la responsabilidad del Estado debe resolverse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la misma, según el cual éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado. (...) reflexiones similares a las realizadas para justificar la teoría de la responsabilidad por el riesgo excepcional permiten afirmar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, que el régimen aplicable en caso de daño causado mediante actividades o cosas que exponen a los administrados a un riesgo grave y anormal, sigue siendo de carácter objetivo. En efecto, basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la Corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en

17. Los actores con las pruebas decretadas y practicadas en el proceso probaron fehacientemente la existencia del daño como se determinó con la historia clínica de **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO**, fotos de la víctima directa y del lugar exacto donde sucedió la descarga dentro de la vivienda que hacían parte integral del informe del perito **DOLCEY CASAS** que se acompañó con la demanda, igualmente el daño se probó con la historia clínica de la lesionada y en la audiencia inicial, interrogatorio de parte de **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** donde al ser interrogada sobre el daño sufrido descubrió partes de su cuerpo para enseñar las severas quemaduras que le produjo la descarga eléctrica, rompiendo en llanto al recordar el siniestro demostrando así inclusive en ese momento preciso afectación psicológica. Por otro lado se demostró la relación de causalidad entre el hecho, las fallas administrativas y la responsabilidad de las **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP** del siniestro por que como operador de red permitió que la red eléctrica estuviera cerca a la vivienda donde sucedió el accidente que le produjo quemaduras a **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO**, demostrando la responsabilidad del ente estatal con los siguientes elementos probatorios que se decretaron y practicaron dentro del proceso como fueron el informe técnico de perito aportado con la demanda, con el interrogatorio de testigo técnico absuelto en audiencia inicial por el ingeniero electricista **DOLCEY CASAS**, con el levantamiento topográfico que demuestra la proximidad de la red eléctrica a la vivienda donde sucedió el siniestro suscrito por la ingeniera topográfica **KATHERIN LIEVANO**, aportado con la demanda que hace parte integral del informe técnico del ingeniero **DOLCEY CASAS** decretado como prueba documental, con el interrogatorio de perito absuelto en audiencia de pruebas por la ingeniera topógrafa **KATHERIN LIEVANO**, con la confesión del testigo técnico **FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ** interrogado por ser decretado como prueba a favor **EMPRESAS**

MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP, con la inspección al lugar donde sucedió el siniestro donde claramente se visualiza la cercanía de la red eléctrica a la vivienda, se realizó confesión de responsabilidad por parte de los ingenieros de emcali que asistieron a la inspección judicial por lo que le es totalmente contrario a derecho predicar que el siniestro se dio por culpa exclusiva de la víctima y menos aun decir que no se demostró la ocurrencia del siniestro pues se probaron las circunstancias de modo tiempo y lugar. Además vale precisar que si la red eléctrica presentara la distancia debida el siniestro no se hubiera ya que como se visualizo en la inspección judicial que la dimensión del tubo cortinero si hubiera estado la red eléctrica conforme al retie no hubiera alcanzado la honda eléctrica evitándose el siniestro, a demás si se hubieran realizado la supervisión y vigilancia a la red eléctrica donde sucedió el siniestro emcali hubiera podido desplegar acciones para que el sin siniestro eléctrico no se presentara y por ultimo no se informo a los usuarios del peligro eminente que se presentaba.

18. Así las cosas se debió o se debe condenar a la entidad demandada a pagar el total de los perjuicios causados a los actores, teniendo en cuenta que daría lugar al surgimiento de una obligación de indemnizar.
19. El tribunal en su sala contenciosa administrativa vulneraron los derechos fundamentales y principios fundamentales de mis poderdantes e incurrió, al menos, en vía de hecho judicial por defecto sustantivo Y violación de precedentes del mismo Consejo de Estado de nuestro país, al no valorar correctamente el material probatorio decretado y practicado en el proceso fulminó negativamente el derecho deprecado por mis mandantes en contra vía de la jurisprudencia garantista del Consejo de Estado ya mencionada soslayando los derechos y principios fundamentales a **ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO, MERY LUCIA ERASO VARGAS, YINETH CAROLINA PULIDO**

ERASO por no ser indemnizados teniendo pelno derecho.

20. Mis poderdantes han agotado todos los mecanismos a sus alcances para enervar los efectos de la sentencia de la justicia ordinaria que elimina sus derechos el Juzgado 21 Administrativo de oralidad de Santiago de Cali (V) y el Tribunal Superior de Cali, sala contencioso administrativa quien fulmino ilegalmente los derechos de los demandantes del proceso administrativo.
21. Por lo que se acudió al recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto dentro del termino legal pero el **TRIBUNAL CONTENCIOSO DE CALI (V), SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** no permitió desatar el estudio por parte del consejo de estado del recurso extra ordinario por la cuantía con lo que queda agotada cualquier posibilidad legal de utilizar un recurso diverso o un sendero procesal diferente.
22. En igual sentido, se cumplen los requisitos generales y especiales para la postulación de la presente acción superior.
23. Los señores **ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO, MERY LUCIA ERASO VARGAS y YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** me han conferido poder amplio y suficiente para instaurar la presente acción constitucional.
24. Sobre la teoría del riesgo excepcional, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, 20 de febrero de 1989. Expediente 4655. Actor: Alfonso Sierra Velásquez, sentencia de la Sección III, del 16 de junio de 1997. Expediente 10024. M.P. Ricardo Hoyos Duque y sentencia del 16 de marzo de 2.000. Expediente 11670. Actor Martiniano Rojas y otros.

Las anterior solicitud de protección se funda en la demostración de las siguientes **TESIS**, que constituyen el curso y sustentación de la acción de tutela:

Tesis uno: Existencia de vía de hecho por defecto material o sustantivo.

Defecto material o sustantivo como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se presenta cuando el juez carece del apoyo constitucional o legal o que presenta la sentencia una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

La Sentencia de segunda instancia que se tilda de vía de hecho judicial que negó las pretensiones de la demanda y confirmo la sentencia de primer grado del Juzgado 21 Administrativo de Santiago de Cali Valle del Cauca, carece del apoyo constitucional y legal siendo la sentencia una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión por que atropella los derechos de mis poderdantes, por violación del artículo 29 superior al derecho a un debido proceso negando los derechos sustanciales de mis poderdantes. En dicha decisión de fondo (sentencia objeto de tutela), el Juzgador de segundo grado (accionado) de **manera palmariamente ligera y sin avizorar ni valorar integralmente la NORMA ELECTRICA RETIE 2013** ya que al parecer solo los valoro en el aspecto de las distancias que fueron valoradas indebidamente en el caso en concreto; así pues se dice que la sentencia de segundo grado carece del apoyo constitucional y legal siendo la sentencia una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión vulnerando así el debido proceso por que **no se valoro el RETIE 2013 integralmente**, así mismo la sentencia tildada como vía de hecho judicial carece del apoyo constitucional y legal siendo la sentencia una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión por que al momento de emitir sentencia **no se valoro la RESOLUCION CREG No. 070 de La Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles**, igualmente se predica que la sentencia de segundo grado es una via de hecho judicial por que al momento de emitir sentencia **no se valoro la Resolución SSPD – 20181300008505 que reglamenta el sistema único de información sobre accidentes eléctricos SUI expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos**

vulnerando así el derecho fundamental a un debido proceso y por ultimo se dice que la sentencia de segundo nivel carece del apoyo constitucional y legal siendo la sentencia una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión por que no se valoro la **LEY 142 DE 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones Capítulo III artículo 28.**

por que en la sentencia atacada vía tutela desconoció lo siguiente:

LO PRIMERO QUE HARE ES PRECISAR QUE ES EL RETIE:

El reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE fue expedido mediante la Resolución No. 180398 de abril 07 de 2004 por el Ministerio de Minas y Energía Resolución siendo modificada mediante la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013. Su propósito principal es **establecer las condiciones técnicas** que deben garantizarse en las instalaciones, equipos y productos utilizados en los **procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y uso de energía eléctrica en el país.**

El RETIE también establece normas para los productos de consumo más comunes en instalaciones eléctricas, para **proteger la integridad de personas, animales, plantas, medio ambiente y bienes materiales.** Esto a su vez contribuye a **prevenir y minimizar los riesgos eléctricos.**

Habiendo hecho la precisión sobre RETIE manifestare lo que no se aplico del RETIE 2008 Y 2013 en la sentencia y que prueba las vías de hecho judicial de la decisión de segundo grado por incurrir en varios defectos materiales o sustantivos por carecer del apoyo constitucional y legal siendo la sentencia una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión vulnerando así el debido proceso.

OBLIGATORIEDAD DE LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS VERSIONES DEL RETIE (2008 Y 2013).

RETIE – 2008:

- Todas las instalaciones objeto del presente reglamento deben demostrar su cumplimiento mediante Certificado de Conformidad .

- La parte ampliada debe demostrar la conformidad con el presente Reglamento...

- En toda instalación nueva, ampliación o remodelación la persona calificada responsable de la construcción deberá declarar el cumplimiento del Reglamento en los formatos definidos en el presente Anexo General.

RETIE - 2013 que es el que se debe aplicar tal y como lo manifestó la sentencia tildada de via de hecho judicial.

- Toda instalación eléctrica construida con posterioridad al 1º de mayo de 2005, ampliación o remodelación...debe contar con el Certificado de Conformidad con el presente Reglamento. Igual condición aplica a las ampliaciones o remodelaciones.... Una vez finalizada la obra eléctrica el operador de red exigirá la **certificación RETIE** antes de conectar la instalación a la red. Este documento es emitido por un organismo de inspección que audita y ratifica que las instalaciones eléctricas, así como los productos utilizados en su diseño, cumplen con la norma.

En el proceso administrativo no se acredita que el operador de red en este caso en concreto **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** haya exigido el certificado de conformidad para haber suministrado el servicio de energía eléctrica como lo ordena el RETIE 2013.

Por lo que si se hubiera dado aplicabilidad total al RETIE 2013 claramente seria la primer falla administrativa de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** ya que al haber suministrado el servicio de energía eléctrica sin contar con el certificado de conformidad con el reglamento RETIE 2013 presenta una falla administrativa que es el nexo causal entre el hecho y el daño causado a las víctimas.

PROHIBICIÓN AL OPERADOR DE RED DE DAR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A INSTALACIONES QUE NO CUENTEN CON EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, EN LAS DOS VERSIONES DEL RETIE (2008 Y 2013).

RETIE - 2008:

- El Operador de Red o quien haga sus veces no debe dar servicio a instalaciones que no cuenten con el Certificado de Conformidad con el RETIE. •En el evento que se energice una instalación sin contar con este Certificado, LA EMPRESA QUE PRESTE ESTE SERVICIO SERÁ RESPONSABLE POR LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE DICHA DECISIÓN.

RETIE - 2013 que es el que se debe aplicar tal y como lo manifestó la sentencia tildada de vía de hecho judicial.

- El Operador de Red, el Comercializador de Energía o quien preste el servicio en la zona no debe energizar la instalación ni suministrar el servicio de energía, si el propietario o tenedor de la instalación no demuestra la Conformidad con el RETIE.

- En el evento que se energice una instalación sin contar con este Certificado, LA EMPRESA QUE PRESTE ESTE SERVICIO SERÁ RESPONSABLE POR LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE DICHA DECISIÓN

Por lo que si se hubiera dado aplicabilidad total al RETIE 2013 claramente sería la segunda falla administrativa de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** ya que no debió de energizar la instalación ni suministrar el servicio de energía sin el certificado de conformidad que exige el RETIE 2013 y en el proceso administrativo no se demostró que el operador de red o sea **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** contara con el certificado de conformidad para haber suministrado el servicio de energía eléctrica de conformidad con el reglamento RETIE 2013 por lo que se presenta una falla administrativa que es el nexo causal entre el hecho y el daño causado a las víctimas.

Igualmente la sentencia del tribunal tildada de vía de hecho judicial realiza una interpretación errónea del RETIE pues mezcla el concepto de distancia mínima entre el voladizo y el poste con distancia horizontal de seguridad a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes áreas respecto de o para circuitos de 13.200 voltios.

La sentencia catalogada como ilegal confunde distancia de seguridad con limite de aproximación segura, conceptos completamente distintos con diferentes valores.

Ahora procederé a manifestar lo que no se aplicó o no se tuvo en cuenta de la Resolución 070 de 1997 emitida por la comisión de regulación de energía y gas CREG en la sentencia de segundo grado tildada de vía de hecho judicial por defecto material o sustantivo por carecer del apoyo constitucional y legal siendo la sentencia una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión vulnerando así el debido proceso.

PROHIBICIÓN AL OPERADOR DE RED DE DAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INSTALACIONES QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS TECNICAS EXIGIBLES, SEGÚN RESOLUCIÓN CREG No. 070 DE 1997 DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA, GAS Y COMBUSTIBLES:

Desde 1997 la CREG introdujo mediante la Resolución 070 la obligatoriedad de reportar los eventos no programados 5.5.3.1 en su inciso primero manifiesta que el operador de red deberá de efectuar reportes ante la ocurrencia de eventos no programados y en su inciso final este mismo 5.5.3.1 en su inciso final manifiesta que para eventos en los niveles de tensión II, III o IV como mínimo el operador de red deberá remitir copia del reporte del evento en un plazo no mayor a 6 horas al centro de control correspondiente y dentro del proceso administrativo identificado con el radicado **760013340021201700048-01 EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** no demostró que hubiera reportado del siniestro de **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO**. De haberse valorado esta Resolución la sentencia de segunda instancia no le hubiera endilgado responsabilidad a las victimas de reportar el siniestro.

Ahora procederé a manifestar lo que no se aplico o no se tuvo en cuenta la SSPD – 20181300008505 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos que reglamenta el sistema único de información sobre accidentes eléctricos SUI que no se tuvo en cuenta en la sentencia de segundo grado tildada de vía de hecho judicial por defecto material o

sustantivo por carecer del apoyo constitucional y legal siendo la sentencia una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión vulnerando así el debido proceso.

SSPD – 20181300008505 QUE REGLAMENTA EL SUI SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SOBRE ACCIDENTES ELÉCTRICOS.

El operador de red debió de reportar el siniestro al sistema único de información sobre accidentes eléctricos SUI situación que no se realizó ya que en el proceso administrativo quedo claro que **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** no reporto el siniestro de **YINETH CAROLINA PULIDO ERASO**, siendo obligación del operador de red reportar el accidente al SUI de haberse valorado esta normatividad la sentencia de segunda instancia no hubiera exigido que quien tuviera que reportar el accidentes eran las victimas si no que por el contrario era **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** quien debió de reportar el accidente al sistema único de accidentes eléctricos.

Ahora procederé a manifestar lo que no se aplicó o no se tuvo en cuenta la **LEY 142 DE 1994** por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones que no se tuvo en cuenta en la sentencia de segundo grado tildada de vía de hecho judicial por defecto material o sustantivo por carecer del apoyo constitucional y legal siendo la sentencia una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión vulnerando así el debido proceso.

LEY 142 DE 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones:

El artículo 28° del Capítulo III de esta ley manifiesta que:

LOS BIENES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

ARTÍCULO 28. Redes. inciso segundo: Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas.

De haberse tenido en cuenta el inciso segundo de este articulo de la Ley 142 de 1994 se hubieran aceptado las

pretensiones de la demanda ya que **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** no acreditó dentro del proceso que realizara mantenimiento a la red eléctrica donde sucedió el siniestro lo que claramente es el nexo causal entre el hecho y el daño ya que de haberse realizado los mantenimientos de las redes donde sucedió el siniestro se hubiera podido evitar el siniestro ya que en el mantenimiento se hubiera avizorado la irregularidad de la red evidenciada y aceptada por los funcionarios de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** en la **INSPECCION JUDICIAL** realizada dentro del proceso administrativo y que fue mencionada en la sentencia tildada de vía de hecho judicial por defecto material o sustantivo.

Tesis dos: Existencia de vía de hecho por defecto fáctico.

El defecto fáctico como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se presenta cuando el juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la decisión porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro de los cauces racionales y/o denegó la práctica de alguna sin justificación.

En el presente caso, La segunda instancia acusada en esta acción de amparo instaurada como vulneradora de la Constitución y la ley por la omisión valorativa probatoria que viola el artículo 29 superior al derecho a un debido proceso, constituye vía de hecho por defecto fáctico, por valoración probatoria arbitraria, (la prueba pericial que realizaron e introdujeron el ingeniero electricista **DOLCEY CASAS** y la ingeniera topográfica **KATHERIN LIEVANO**, el interrogatorio de parte a la víctima **YINETH CAROLINA PULIDO ERAZO**, **PRUEBA DE OFICIO** para que las curadurías de Santiago de Cali informen sobre la existencia de permisos o licencias de construcción para el primer, segundo y tercer piso del inmueble ubicado en la calle 83 No. 26P-04, barrio Alfonso Bonilla Aragón, del testigo técnico de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** **FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ** y **LA INSPECCION JUDICIAL**) decidiendo prácticamente por vías de hecho negar las pretensiones de la demanda exonerando al operador de la red **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** de indemnizar a las víctimas cuando éste había manifestado y confesado en el

mismo trámite judicial de manera expresa, clara y nítida en la fase de pruebas que si denota una situación anómala con la distancia de la red eléctrica tal y como claramente lo cita la sentencia de segunda instancia en su numeral 83 que se tilda de vía de hecho judicial “los señores profesionales de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** aunque reconocieron que si denota una situación anómala con la distancia de la red eléctrica” siendo esto suficiente para demostrar el nexo causal entre el hecho, el daño generado a la víctima y por ende la responsabilidad de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** de indemnizar a las víctimas por incurrir en la falla administrativa de no haber identificado la anomalía de la red con anterioridad a la época del siniestro de **YINETH CAROLINA PULIDO ERAZO** ya que de haber identificado dicha anomalía antes del siniestro demandado en reparación directa el accidente de **YINETH CAROLINA PULIDO ERAZO** se hubiera podido evitar 100%.

Ahora procederé a manifestar por que la sentencia de segunda instancia es una vía de hecho judicial por defecto factico que afecta el debido proceso por que en la sentencia de segundo grado se presentó indebida valoración probatoria de la prueba pericial experticia al lugar de los hechos realizada e introducida por el ingeniero electricista **DOLCEY CASAS** y la ingeniera topográfica **KATHERIN LIEVANO**.

El ingeniero electricista **DOLCEY CASAS** el día de la audiencia a la que asistió en calidad de testigo técnico manifestó en el minuto - 10:22:40 – “ese es el procedimiento que yo utilizo para poder responder con certeza y bajo la gravedad del juramento las tres (3) las tres preguntas que me hizo la parte demandante, que fueron una (1) si las instalaciones en el sitio eran o correspondían a las distancias mínimas que establece el reglamento, anticipo mi respuesta es NO ahora explico porque, la segunda pregunta que me hace para el dictamen es- si las instalaciones eléctricas de - EMCALI en el sitio estaban de conformidad con todas las disposiciones del reglamento, mi respuesta es NO, encontré cinco (5) No conformidades, ósea cinco (5) violaciones del reglamento, para al final concluir que la instalación eléctrica de - EMCALI - del sitio accidente y la fecha del accidente estaba en abierta violación del reglamento, la tercera pregunta que se me hizo fue dar un concepto de porque se produjo el accidente, y cómo se produjo, entonces a eso es lo que yo

me voy a referir, por eso pues anexo conforme al código general del proceso anexo todos los documentos que certifiquen mi idoneidad profesional en el campo de la electrotecnia y especialmente en este asunto de las Descargas Eléctricas y el Arco Eléctrico que fue precisamente lo que ocurrió aquí, porque ese es un fuerte de mi especialidad como ingeniero tengo 49 años trabajando en esto.

La ingeniera topográfica **KATHERIN LIEVANO** el día de la audiencia a la que asistió en calidad de testigo técnico manifestó en el minuto - 11:17:58 en adelante manifestó que "pues el trabajo que se realizo fue básicamente las mediciones del sitio del accidente hasta la línea eléctrica, se tomó toda la fachada, la carretera, el poste, para indicar estas distancias".

- en adelante del minuto 11:18:27 frente a pregunta formulada contesta la ingeniera "pues se realizó un levantamiento topográfico con un instrumento de precisión que se llama estación total, se realiza pues una poligonal y se hace la planimetría del sitio en este caso también se tomaron alturas para poder determinar los niveles de la edificación, los pisos, a que altura está el poste, la ventana".

- en adelante del minuto 11:19:02 frente a pregunta `` que implemento utilizo para tomar la medida de altura`` contesta la ingeniera "Estación Total, la estación total es el instrumento más utilizado en topografía que sirve para determinar ángulos distancias horizontales y verticales, con las cuales después se procesa la información para sacar coordenadas y alturas.

-(en el minuto 11:46:14) el apoderado del llamado en garantías Allianz Seguros formula la pregunta si usted como perito dentro del ejercicio de la función que se le asigno, solicito precisamente la información registrada en Emcali, para realizar la experticia "No porque yo trabajo, yo tengo una metodología que es distinta, la fecha del accidente yo me voy a la fuente, a la base de datos única del gobierno de Colombia que es SUIT, donde obligatoriamente deben reportarse todos los accidentes eléctricos que ocurran en el país, hay una base de datos que uno maneja, uno puede

averiguar si el accidente ocurrido en la calle tal de la ciudad tal del circuito tal fue reportado o no.

- (en el minuto -11:47:22)- el señor Juez pregunta al ing. Dolceý, si este caso fue reportado "NO fue reportado".

Clara mente dicha prueba pericial realizada por el ingeniero electricista y la ingeniera topográfica fue valorada indebidamente ya que de haberse valorado en debida forma seria una prueba contundente que demuestra la responsabilidad de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** debiendo ser condenada a indemnizar a las victimas por que con dicho material probatorio debidamente recaudado en el proceso administrativo se demuestra el nexo causal entre el hecho y el daño a las víctimas por la red eléctrica por presentarse situación anómala con la distancia de la red eléctrica tal y como lo confeso **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** y tal como lo manifestó en el numeral 83 la sentencia de segundo grado tildada de vía de hecho judicial.

Ahora procederé a manifestar por que la sentencia de segunda instancia es una vía de hecho judicial por defecto factico que afecta el debido proceso por que en la sentencia de segundo grado se presentó indebida valoración probatoria de la **PRUEBA DE OFICIO** para que las curadurías de Santiago de Cali informen sobre la existencia de permisos o licencias de construcción para el primer, segundo y tercer piso del inmueble ubicado en la calle 83 No. 26P-04, barrio Alfonso Bonilla Aragón.

La **Curaduría Urbana DOS (2) de Santiago de Cali:** "en atención al escrito de la referencia, en el cual solicita se le informe si en esta Curaduría Urbana existen permisos o licencias de construcción expedidas para el predio ubicado en la Calle 83 No. 26p-04 del Barrio Alfonso Bonilla Aragón, al respecto me permito comunicarle lo siguiente:

Revisada la base de datos encontramos que para dicho predio el Curador Urbano 2 anterior, arquitecto CARLOS ALFONSO NUÑEZ VICTORIA, expidió lo siguientes Actos Administrativos:

- Resolución: **No. 76001-2-09-0458 del 28 de mayo de 2009,** por medio de la cual se expidió un ACTO DE

RECONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA EDIFICACIÓN DESTINADA A COMERCIO a los señores GABRIEL ARNULFO CHÁVEZ GUEVARA Y DORIS DEL SOCORRO GUEVARA

- Resolución: **No.76001-2-09-0459 del 28 de mayo de 2009**, por medio de la cual se otorgó una Licencia de Construcción para desarrollar un proyecto de REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN A EDIFICACIÓN MIXTA (COMERCIO VIVIENDA) EN 4 PISOS.

Actos Administrativos otorgados con base en la Línea de Demarcación No. SOU- 001105-DAP-2009, expedida por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

Clara mente dicha prueba decretad de oficio fue valorada indebidamente ya que de haberse valorado en debida forma seria una prueba contundente que demuestra que la construcción cumplió con lo establecido por la norma para propiedad ya que dentro del proceso así se acredito y ninguna de las partes allego prueba alguna para demostrar que el accidente se produjera por causa de la construcción de la propiedad que como se evidencio antes cuenta con las respectivas licencias de construcción por lo que la sentencia incurre en vía de hecho judicial al manifestar en la sentencia de segundo grado que no se sabe si fue red eléctrica o la vivienda la que no respeto las distancia de seguridad ya que se demostró hasta la saciedad que la anomalía las presenta las distancias de la red y no se demostró que la anomalía que se presenta fue por causa de la distancia de seguridad de la propiedad. De haberse valorado dicha prueba decretada de oficio en debida forma era suficiente para demostrar el nexo causal entre el hecho y el daño ya que fue la red eléctrica la que no respeto las medidas de seguridad ordenadas por el RETIE 2013 por lo que debió ser condenada **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** a indemnizar a las victimas por que con dicho material probatorio debidamente recaudado en el proceso administrativo se demuestra que la edificación propiedad privada si cumplió con los requisitos legales causando el accidente la anomalía de la distancia de la red eléctrica como lo confeso o acepto **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** tal como lo manifestó en el numeral 83

la sentencia de segundo grado tildada de vía de hecho judicial.

Ahora procederé a manifestar por que la sentencia de segunda instancia es una vía de hecho judicial por defecto factico que afecta el debido proceso por que en la sentencia de segundo grado se presentó indebida valoración probatoria del testimonio del testigo técnico de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ.**

A las 2 de la tarde del día 9 de Julio de 2019 dentro del proceso administrativo por reparación directa se toma declaración al testigo técnico de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ**, Director de Distribución de Energía de la Empresas municipales de Santiago de Cali Valle del Cauca.

en el minuto 14:59:54 el señor juez pregunta ustedes como empresa prestadora del servicio no tienen ningún protocolo a seguir de requerir, aun sabiendo Que esas situaciones está generando un riesgo "nosotros notificamos alas curadurías a la secretaria del uso del espacio público, también notificamos al cliente y le decimos al cliente los riesgos eléctricos en que puede incurrir si continua con esa construcción y mientras define planeación le dejamos la notificación de que no puede aproximarse a la Red, que es un peligro de alta tensión para que el propietario tome sus propias precauciones.

en el minuto 15:00:47 el señor juez pregunta en este caso particular no se hizo - "EN ESTE CASO PARTICULAR NO SE HIZO."

Clara mente este testigo técnico decretado para EMCALI acepto o confeso que no se realizo absolutamente nada para evitar que el accidente de **YINETH CAROLINA PULIDO ERAZO** por lo que dicha prueba fue valorada indebidamente ya que al no existir comprobante alguno de que se hubieran realizados los respectivos mantenimientos o supervisión a la red eléctrica se hubiera podido evidenciar la anomalía que presenta la red eléctrica y que fue visualizada, aceptada y confesada por los profesionales de emcali el día de la INSPECCION JUDICIAL pues al haberse realizado los mantenimientos y supervisiones respectivos a la red eléctrica se hubiera evidenciado el peligro eminente y **EMCALI E.I.C.E.**

E.S.P. hubiera podido realizar las gestiones para mitigar el riesgo o peligro eminente corrigiendo la anomalía o notificaciones a las curadurías, a la secretaria del uso del espacio público también, hubieran podido notificar al cliente y decirle a las víctimas como residentes (los demandantes dentro del proceso de reparación directa) del sector donde se presenta la anomalía de la red eléctrica para que tomaran precauciones para que el accidente no se presentara, en este punto recalco o hago énfasis que en el proceso administrativo **EMCALI E.I.C.E. E.S.P. demostró o mejor aun ni siquiera aportó prueba alguna que certifique que esta entidad hubiera realizado supervisión o mantenimiento a la red eléctrica;** siendo entonces estas omisiones o las fallas administrativas en que incurrió **EMCALI** que son el nexo causal entre el hecho, el daño y la obligación de indemnizar del operador de red **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** por omitir sus funciones de supervisión y vigilancia de la red eléctrica pues fue ello lo que no permitió que esta misma entidad operadora de red mitigara el peligro eminente que ocasionó el accidente de **YINETH CAROLINA PULIDO ERAZO** siendo entonces esta valoración probatoria indebida del testigo técnico de emcali convirtiendo así a la sentencia de segundo nivel atacada por tutela una vía de hecho judicial por defecto factico por lesionar el derecho fundamental a un debido proceso por indebida valoración probatoria.

Ahora procederé a manifestar por que la sentencia de segunda instancia es una vía de hecho judicial por defecto factico que afecta el debido proceso por que en la sentencia de segundo grado se presentó indebida valoración probatoria de la prueba **INTERROGATORIO DE PARTE DE YINETH CAROLINA PULIDO ERAZO** realizada dentro del proceso administrativo el día 31 de julio de 2019.

La joven, **YINETH CAROLINA PULIDO ERAZO** en audiencia de interrogatorio de parte a minuto 01:04:41 en adelante empieza a narrar los hechos "como a las 4:00 de la tarde, lo que recuerdo es que estaba cambiando una cortina en ese momento siento que algo detrás de mí me envuelve, siento un fogonazo y un sonido súper fuerte, así como cuando explota un transformador, de repente me echa para atrás estoy echando humo y me meto de una al baño, llega mi

papá mi mamá, todos llegan a mirar que paso, yo sentía que me iba, yo me sostenía muy fuerte del lavamanos y empecé a orar, a pedirle a Dios que no me dejara ir.

A minuto 01:08:02 **YINETH CAROLINA** empieza a mencionar los lugares donde sufrió heridas y mostrar algunas de sus lesiones "quemaduras en el brazo izquierdo fue muy profunda porque me tuvieron que hacer un injerto y me sacaron pedazos de la pierna, en el costado izquierdo del abdomen. Después me llevaron a cirugía como tres (3) veces y ya los cuidados normales".

en el minuto 01:14:10 el señor juez pregunta a la joven Carolina, que limitaciones, que consecuencias que cambio en tu vida rutinaria después del accidente - "todo, empezando que yo no uso ropa destapada, siempre tengo que estar con camisa manga larga porque eso es maluco mostrar las cicatrices y que te miren y todo eso, desde que me accidente no voy a piscina, quede traumada en el sentido de que me da miedo todo" (en el minuto - 01:14:50 se puede percibir como nuevamente brotan lágrimas de sus ojos, mientras su voz se apaga de manera súbita como también se nota o visualiza en el minuto 01:15:16 "el hecho de recordar ese momento me pone muy... más que todo...."

a minuto 01:27:33 la parte demandante formula la pregunta – cuantos años tenía usted al momento de los hechos "tenía 14 años" continúan las preguntas podría manifestarle al despacho usted a cuánto tiempo del accidente cumplía años - "eso fue el 29 de noviembre cumplía 15 años el 11 de diciembre, lo cual estaba hospitalizada".

Se nota claramente los perjuicios psicológicos padecidos por el accidente eléctrico a **YINETH CAROLINA** al recordar ese siniestro o al momento de relatar ese instante tan abrumador para su vida se suelta en llanto deslizan por sus mejillas lagrimas, mientras su voz se apaga de manera súbita, así mismo se visualizan las afectaciones físicas que padeció la

victima y que fueron narradas, mostradas por la victima en esta audiencia, siendo todo lo anterior pasado por alto o no evidenciado o no mencionado por la sentencia de segundo nivel por lo que se presento indebida valoración probatoria que afecta el derecho fundamental al debido proceso convirtiendo la sentencia en vía de hecho judicial por defecto factico.

Ahora procederé a manifestar por que la sentencia de segunda instancia es una vía de hecho judicial por defecto factico que afecta el debido proceso por que en la sentencia de segundo grado se presentó indebida valoración probatoria de la prueba **INSPECCION JUDICIAL** desarrollada dentro del proceso administrativo.

En el video 2 del CD 1 de la Diligencia de Inspección Judicial.

En el minuto 03:16 se observa cómo se toma la medida del cortinero que marca una distancia de (2.24m).

En el minuto 03:47 el señor juez pregunta y cuánto hay de la ventana a la cuerda contesta (1.23m).

En el minuto 04:46 el Ing. Dolceý Casa - ratifica lo que dice y plasmo en el informe pericial, "ese conductor más próximo está a Un metro con veintitrés (1.23m). Debería estar a Dos con treinta (2.30m), es decir apenas está a la mitad."

En el minuto 05:15 el Ing. Dolceý Casa relata "ella saca el cortinero, ella tiene el cortinero aquí y está manipulando la cortina y por atrás sale el cortinero, entonces como ese clave está en condición de alto riesgo porque está a la mitad de lo que debería estar."

en el minuto 05:52 el Ing. Dolceý Casa - relata "con este movimiento se está acercando al cable y empieza a producirse una descarga, se está acercando al cable hay un campo eléctrico aquí, este es un conductor que está en movimiento y empieza a producirse una descarga"

entre el cable y la punta del cortinero."

En el video 3 del CD 1 de la Diligencia de Inspección Judicial.

A minuto 02:37 el señor juez pregunta a Carolina Pulido - ¿qué fue lo que hiciste? - "yo bajé la cortina, la saque y empecé a meter la cortina así, metía la cortina porque la iba a cambiar y ya...".

A el minuto 04:48 el señor juez pregunta a Carolina Pulido - ¿cómo tenía cogida la cortina? "la limpia la empecé a meter por acá y la iba metiendo y llegue fue como hasta la mitad y de ahí fue cuando ya exploto."

En el video 5 del CD 1 de la Diligencia de Inspección Judicial.

En el minuto 00:10 se observa al señor LUIS FERNANDO SAAVEDRA (testigo técnico de emcali) con una foto de Google Map, señalando que por la calle 83 la posición de la Red está en posición bandera. (lugar donde no sucedió el accidente.

A minuto 01:44 el señor juez pregunta a Carolina Pulido - el accidente fue aquí (señalando la calle 83) o fue allá - (señalando la carrera 26P) "pues fue allá porque acá no hay donde poner cortinas." (señalando la carrera 26P).

En el minuto '05:47 el señor juez pregunta a Carolina Pulido - por favor indíquenos que fue lo que paso, recuérdenos que fue lo que paso el día del accidente - "empecé a sacar la cortina y saque hasta acá - (simulando con un palo que trajeron de una obra contigua al inmueble) y de ahí baje el tubo y empecé a meter la nueva, no la termine de meter y ahí fue cuando paso todo".

A minuto 07:17 el señor juez pregunta a la topógrafa - recuerda la medida del cortinero "(2.30m)".

En el minuto 07:28 el señor juez pregunta a la topógrafa - de la línea primera que hay hasta la ventana cuanto hay, a lo que responde **(1.23m)**.

En el video 6 del CD 2 de la Diligencia de Inspección Judicial.

En el minuto 02:00 el señor juez pregunta a Carolina Pulido - recuerda las condiciones del día meteorológicas, llovía, era seco había sol, que hora era, recuerda - "era seco aproximadamente las (04:00pm).

En el video 7 del CD 2 de la Diligencia de Inspección Judicial.

-
A minuto 00:40 el señor juez- solicita ver la Demanda - haber leamos los hechos - calle 83 No. 26P-04 Barrio Alfonso Bonilla Aragón - es esta-la afirmación que se hace en el hecho según es-ella reside en la dirección calle 84 No. 26P-04 esta casa corresponde a esta dirección.

En el minuto 06:40 LUIS FERNANDO VALENCIA OSPINA (testigo técnico de emcali) "yo elabore el informe técnico para que lo firmara Luis Fernando Saavedra elabore el informe técnico basado en los hechos de la demanda claramente se dice allí que hay una configuración bandera, por el otro lado es configuración centro esto es bajado de Google Map - en el 2013 paso el carro por aquí y la configuración sigue siendo la misma actualmente.

A minuto 07:20)- LUIS FERNANDO VALENCIA OSPINA (testigo técnico de emcali) "este lugar no se tuvo en cuenta (señalando el lado de la carrera 26P) porque es configuración centro.

en el minuto 11:07 el señor juez analiza el (hecho No. (4)), "por culpa de que el cableado eléctrico venia en posición bandera y justo en la propiedad donde se

presentó el siniestro cambio a centro."

A minuto 11:35 el señor juez señala "eso si lo verifique antes de que empezáramos, sino nosotros vamos hacia afuera (señalando las redes eléctricas que vienen en posición bandera) y aquí cambian."

En el minuto 12:03 el señor juez "es decir lo que está narrando es como efectivamente se puede mirar y justo al frente de la casa pasa a centro."

A minuto 12:43) el señor juez - "tráiganme un recibo de energía aquí por favor que hay aparece la dirección."

En el minuto 14:07) el señor juez "si a su mismo que es por este lado el accidente - (señalando el costado de la calle 83) como hacemos para que un cortinero de (2.30m) llegue hasta allá, que venta hay en este costado que nos indique aquí había un cortinero."

En el video 8 del CD 2 de la Diligencia de Inspección Judicial.

A minuto 00:03 el señor juez observa el recibo de energía "donde dice calle 83 No. 26P-04 manifestando que corresponde a la dirección."

En el minuto 01:48) el señor juez - observa la red eléctrica - "la red venia en posición bandera esa es bandera pregunto, las que se alcanzan a observar son bandera." Identificando que justo al frente de la propiedad donde sucedió el accidente (carrera 26P) manifiesta o confirma que la configuración de la red eléctrica cambia de bandera a centro generando esto proximidad de la red electrica a la propiedad.

En el video 9 del CD 2 de la Diligencia de Inspección Judicial.

A minuto 00:56) - el señor juez - pregunta a los trabajadores de - EMCALI - en el 2015 según el RETIE vigente cual era la obligación de ustedes o cual era él debe ser de la empresa cuando encontraba esta situación que después de cuatro (4) años, persiste y aun no se ha visto absolutamente nada y que se replica en esta cuadra y al frente también se verifica que hace la empresa - nosotros lo que estamos haciendo es cambiando las redes y venimos haciendo un trabajo desde el año 2013-2014".

En el minuto 01:26 el señor juez - pregunta a los trabajadores de - EMCALI - ustedes cada cuanto hacen una inspección sobre las redes o ustedes las hacen. solamente cuando ocurre algún accidente - "lo que pasa es que nosotros trabajamos conforme a los indicadores de calidad, nosotros tenemos que cuidar primero la calidad del servicio, así tenemos los récords de porque surgen las interrupciones." Confesando aquí que no realizaron supervisión ni vigilancia a la red eléctrica.

en el minuto 02:01) el señor juez - pregunta a los trabajadores de EMCALI- cada cuanto hacen inspección a las redes - "la inspección es corriente puede pasar una vez al año o dos veces al año"

A minuto 02:14 el señor juez pregunta a los trabajadores de - EMCALI - usted como jefe de redes pueden certificar que en este sector hicieron visita, hicieron la inspección "nosotros nos enteramos de este caso porque nunca nos informaron de que iban hacer este trabajo de ampliar las redes solo cuando ocurre el accidente." Confesando que nunca se realizo supervisión y vigilancia a la red.

En el minuto 02:40 el señor juez pregunta a los trabajadores de EMCALI - después de que ocurrió el accidente y ustedes pudieron constatar que las redes estaban en esa posición, después de cuatro (4) años, que hicieron para corregir - "como está en proceso de demanda nosotros nos enteramos de la demanda entonces si cambiamos no se

modifica." Claramente dice que no hicieron nada para evitar el siniestro aun estando bajo las responsabilidades legales del operador de red.

El empleado de EMCALI- al momento de elaborar el informe hacen ver que el operador de la Red, en este caso EMCALI. EICSE. ESP, cumple las distancias establecidas en el reglamento Técnico de Instalación Eléctricas RETIE, para el costado de la CALLE 83, conforme a su propio interés. OMITIENDO - al momento de preparar el informe técnico, el costado de la carrera 26P, sector donde se presentó el accidente, dentro del inmueble y que es por donde se presenta la anomalía de la red eléctrica confesada por EMCALI. EICSE. ESP.

Todas estas circunstancias fueron pasadas por alto por el Juzgador de segundo nivel accionado en su sentencia de segunda instancia, ya referida, y *el tema se encuentra pacíficamente reconocido por la jurisprudencia del CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA.*

Se valoraron las pruebas indebidamente o ilegalmente ya que se omitió las manifestaciones de aquellas que fueron practicadas y que claramente favorecerían las pretensiones de la parte actora del proceso de reparación directa; la sentencia de segunda instancia es caprichosa por no tener el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal que sustentó su decisión de segunda instancia ya que con el debido valor probatorio se demuestra plenamente, certeramente, indudablemente y nítidamente la responsabilidad de EMCALI de reparar a las víctimas por evidenciarse mas allá de toda duda razonable que existió nexo de causalidad entre el daño y el hecho por las fallas administrativas que se probaron en el proceso administrativo por parte del operador de red **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** y por violación al derecho a la igualdad procesal y debido proceso en tanto resulta extraño y antojadiza la valoración probatoria contra derecho y también de manera superlativamente ligera al negar las súplicas de la demanda por reparación directa postulada por las hoy partes accionantes, dentro de dicho proceso administrativo judicial.

Para lo que viene a nuestro caso, la Sentencia de segunda instancia que se tilda de vía de hecho judicial, que confirmo revocó la de primer grado del Juzgado 21 Administrativo de oralidad de Santiago de Cali (V), atropella los derechos de mis poderdantes, por violación del inciso final del artículo 29 de la Carta, especialmente al derecho superior al derecho a un debido proceso, con la negativa del reconocimiento de los derechos sustanciales de mis poderdantes en dicha decisión de fondo (sentencia objeto de tutela), el Juzgador de segundo grado (accionado) de manera asombrosamente ligera y sin avizorar ni valorar el conjunto probatorio completo, decidió prácticamente por vías de hecho, negar las pretensiones de la demanda cuando el demandado inclusive manifestó y/o confesara de manera expresa en múltiples ocasiones, clara y nítida, tanto en la fase preprocesal de dicho diligenciamiento (prueba testimonial del testigo técnico de emcali que asistió a la audiencia en las instalaciones del Juzgado 21 administrativo de oralidad de Santiago de Cali Valle del Cauca como en la inspección judicial lo confesaron los profesionales de emcali tal y como lo manifestó la sentencia de segunda instancia tildada de ilegal.

Como fácilmente puede observarse, todas estas circunstancias fueron pasadas por alto, de manera incomprensible por el Juzgador de segundo nivel accionado en su sentencia de segunda instancia, ya referida, ya el *tema se encuentra pacíficamente reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado que determina que no es responsabilidad de la víctima soportar las consecuencias y asumir los perjuicios a ellos mismos causados cuando se presentan anomalías con la red eléctrica o que el operador de red incumpla con las funciones delegadas por imperio de la ley cualquier demanda presentada consolida el derecho a que se indemnice a las víctimas por parte del operador de red, pues existen unos requisitos de insalvable cumplimiento que, precisamente, no fueron cumplidos por **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** además que de manera precisa se probó la cercanía de la red eléctrica a la propiedad donde sucedió el siniestro siendo imposible aseverar como lo hizo la sentencia de segundo grado ilegalmente que fue culpa exclusiva de la víctima ya que de estar la red eléctrica cumpliendo las medidas establecidas por la norma eléctrica si se podría predicar culpa **EXCLUSIVA** de la víctima o culpa compartida*

de lo contrario es responsabilidad 100% de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** indemnizar a las víctimas. Esto significa, sin más, que el Juzgador de segunda instancia tutelado se inventó la interpretación probatoria en el proceso, estando prueba en contrario debidamente decepcionada por el Juez de primer grado, también ratificada con en la audiencia testimonial decretado para emcali y la diligencia de inspección judicial practicadas en el mismo asunto donde estos peritos técnicos en ambos espacios procesales aceptaron o confesaron que no hicieron supervisión y vigilancia a la red, no informaron a los usuarios del peligro eminente en el que se encontraban y no hicieron absolutamente ninguna labor para evitar el daño sufrido por la víctima del accidente eléctrico a causa de la cercanía de la red eléctrica a la propiedad por lo que se debió condenar a **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.** a indemnizar a las víctimas del siniestro demandantes dentro del proceso administrativo judicial por reparación directa donde se fulminaron los derechos de la parte actora con la sentencia de segundo grado tildada de ilegal por ser una clara y absoluta vía de hecho judicial por indebida valoración probatoria que afecta el derecho fundamental al debido proceso.

Debe tenerse en cuenta que los actores probaron la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la falla de la administración realizado en desarrollo de la actividad riesgosa como operador de red y de nada le debió de servir al demandado alegar la ausencia de falla pue es el caso concreto no se demostró o probó la ausencia de las fallas administrativas como para que la sentencia del Tribunal exonerara a la parte demandada de indemnizar a las víctimas, Tampoco probó la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

En conclusión DE LA TESIS DOS: DE LA EXISTENCIA DE LA VIA DE HECHO POR DEFECTO FÁCTICO

Al respecto, sostengo y demuestro la siguiente **TESIS: LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA PORFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA SEGUNDA DE DECISION ORAL, MAGISTRADOS DOCTOR RONALD OTTO CEDEÑO BLUME (PONENTE), DOCTOR JHONK ERICK CHAVES BRAVO, DOCTOR FERNANDO AUGUSTO**

GARCIA MUÑOZ, EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2023, CONSTITUYE VÍA DE HECHO POR DEFECTO FÁCTICO, POR VALORACIÓN ARBITRARIA (ACCIÓN VALORATIVA CONTRAEVIDENTE) Y VIOLACIÓN AL DERECHO DE IGUALDAD PROCESAL.

Para demostrar esta tesis, procedo de la siguiente manera: En primer lugar, hago una presentación del principio de autonomía conforme al cual el juez goza de una gran discrecionalidad para decidir sus causas.

En segundo lugar, y desde la doctrina constitucional, demuestro que esa discrecionalidad no es absoluta, sino que tiene límites.

Finalmente, demuestro como en el **presente caso hay vía de hecho por defecto fáctico**, al ser producidas providencia (sentencia de segunda instancia por el funcionario judicial tutelado) contraevidente con vulneración palmaria del debido proceso probatorio, de la valoración completa del recaudo demostrativo en el proceso administrativo judicial objeto de esta tutela; y al derecho a la igualdad procesal.

1. EL PRINCIPIO GENERAL DE AUTONOMÍA DEL JUEZ

Según lo ha afirmado la Corte Constitucional, en virtud del principio de autonomía, cada uno de los jueces en ejercicio de sus funciones goza de una gran discrecionalidad valorativa, cada uno de ellos puede tomar las decisiones que sean del caso, dentro de su personal criterio y los de la sana crítica. En este sentido y en principio, el juez **de tutela no podría cuestionar** el modo cómo el juez de conocimiento ha valorado, interpretado o decidido. Al respecto, la Corte sostuvo en Sentencia T-329 de 1996, que la valoración del caso en sus elementos fácticos y jurídicos está reservada al juez competente. Sin embargo, en lo referente a los precisos términos de tal principio, ha encontrado la Corte, que tal autonomía ha de ser discrecional, mas no arbitraria, pues en caso de serlo, constituiría una vía de hecho que habrá de ser declarada en sede de tutela. **Veamos:**

2. EL LÍMITE AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DEL JUEZ. LA VÍA DE HECHO

Los límites del principio de autonomía fueron también precisados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1017 de 1999, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, donde se afirmó que "el principio de autonomía funcional no es absoluto. Como ya lo había reconocido la Corte, la Constitución le asigna a los jueces un marco importante de autonomía funcional siempre y cuando se ajuste a la ley. El juez no es autónomo para violar el derecho. Tampoco para denegar justicia". Al ser la anterior la doctrina de la Corte en torno a los límites del ejercicio de la autonomía judicial la pregunta a ser respondida es la siguiente: ¿en qué casos no se ajusta a la ley la tarea valorativa y probatoria del juez que conoce de una causa cualquiera? Este interrogante fue respondido con precisión por la Corte Constitucional perfilando con su respuesta la vía de hecho que aquí se alega. La solución está contenida en la sentencia de unificación SU-477 de 1997, magistrado ponente Jorge Arango Mejía, con forme con la cual "no se adecua a este desiderátum la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente". De acuerdo con la anterior resta observar si en el caso concreto fue excedido el ejercicio del principio de autonomía funcional.

3. CONFIGURACIÓN DE LA VÍA DE HECHO POR DEFECTO FÁCTICO

De acuerdo con la doctrina ya expuesta se está en presencia de un defecto fáctico, cuando ***"resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que sustenta la decisión"***. En el presente caso, el juez que definió la sentencia de segunda instancia, hoy tutelado, valoró arbitraria, temeraria y tendenciosamente la "prueba" allegada por la parte actora, la "prueba" allegada por la parte demandada y la inspección judicial en estas dos

últimas actuaciones inclusive se dio confesión de responsabilidad como se demostró dentro del proceso objeto de esta acción superior en tanto que toda la actividad de ese Despacho Judicial estuvo únicamente encaminada a la construcción de que no se demostró el hecho (circunstancias de modo tiempo y lugar) demostración que si se hizo, ni se demostró las fallas administrativas del operador de red pero lo que verdaderamente paso fue que el Juzgador extrañamente o ilegalmente valoro las pruebas que si demostraron nítidamente el nexo causal entre el hecho y las fallas administrativas

Al respecto solamente se puede afirmar que el funcionario accionado no maneja con claridad el concepto de carga probatoria y valoración de la misma para definir la pretensión de reparación directa a las victimas. no tiene sentencia hoy atacada no tiene ni idea de lo que es el concepto de carga demostrativa y adecuada valoración probatoria en materia de procesos de reparación directa por accidente eléctrico. Lo realmente grave es que quien habla de que en este proceso se cumplieron las exigencias probatorias para que se diera lugar a exonerar al operador de red de reparar directamente a las victimas, es el mismo funcionario que, en la misma pieza procesal de segunda instancia, reconoce contradictoriamente que el demandado reconoció que la red eléctrica presenta anomalías.

Adicionalmente a lo anterior, el obstinado desprecio procesal y probatorio del Juez accionado, respecto de la prueba arimada por las partes convocadas a la actuación procesal, incluso practicadas por el mismo juez de primera instancia donde se presentó confesión de que la red presentaba anomalías ratificada expresamente en el proceso, por las partes, los testigos, el perito mencionando el propio tribunal aquí accionado la confesión en su sentencia tildada de ilegal, llegándose al exceso de hablar irresponsablemente sin atender a los elementos articulantes

que de ésta ha establecido la doctrina administrativa y la jurisprudencia de LA SALA 3 DEL CONSEJO DE ESTADO sobre riesgo excepcional.

Todo lo anterior, o sea, el grosero tratamiento que se hizo de la prueba recaudada en el proceso, ha de amañarla como prueba de exoneración de responsabilidad inexistente para el demandado dentro de la acción administrativa de reparación directa que desembocó en una sentencia de segunda instancia (objeto de la presente tutela), con ribetes de vía de hecho judicial, materializado en el también ligero y grotesco tratamiento y evaluación de la prueba para exonerar de responsabilidad al operador de red demandado de indemnizar, conducen ineluctablemente a la contra evidencia contenida en la decisión de segundo grado constitutiva y demandada en la presente acción de amparo como **VIA DE HECHO JUDICIAL**, respecto del material probatorio allegado, el que fue retorcido de tal manera que la prueba realmente de la responsabilidad de reparar por parte de la demandada a las víctimas se constituyó en "prueba privilegiada" para negar las pretensiones de la demanda y declarar exonerado de toda responsabilidad a la parte demandada, invirtiéndose, inconstitucionalmente, el valor de la prueba allegada, imponiéndose así el criterio desbordado, caprichoso y arbitrario del juzgador y no el del sistema normativo hasta configurar la vía de hecho que aquí se alega.

A modo de conclusión, baste la cita de la doctrina constitucional contenida en la Sentencia T-555 de 1999, magistrado ponente José Gregorio Hernández Galindo conforme a la cual se puede producir también una vía de hecho en el momento de evaluar la prueba, si la conclusión adoptada con base en ella es contraevidente, es decir, si el juez infiere de ella hechos que aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las legales pertinentes no podrían darse por acreditados".

V. DE LA TEORÍA DE LAS VÍAS DE HECHO. PROCEDENCIA DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

La acción de tutela se encuentra regulada, a nivel constitucional, por el artículo 86 de nuestra Carta Política, desarrollada por el Decreto 2591 de 1992. Esta norma incluía en su artículo 40 la posibilidad de accionar en tutela en contra de providencias judiciales.

Aunque comenzaron a ser otorgados algunos amparos luego de expedida la norma el día uno de octubre de 1992, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, en decisión dividida, declaró la *inexequibilidad* afirmando no obstante en la parte final del fallo lo siguiente: "*no riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable*".

Fue a partir de este pasaje que la Corte Constitucional y varios despachos del país comenzaron a tutelar providencias judiciales contentivas de Vías de hecho. Con el paso del tiempo, la doctrina de la Corte Constitucional ha venido depurando la figura y al respecto ha identificado ocho defectos o yerros cuya configuración da origen a la vía de hecho. Estos defectos han sido explicados en numerosos fallos, pero muy especialmente en las sentencias T-231 de 1994, T-008 de 1998 y T-1017 de 1999, entre otras (T-367 de 2018). 2.2.2. De igual forma, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, además de los requisitos generales, se señalaron las causales de procedencia especiales o materiales del amparo tutelar contra las sentencias judiciales.

Conforme con esta doctrina, ocho (8) clases de defectos, yerros o fallas protuberantes dan lugar a la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Tales son los siguientes requisitos generales y de procedibilidad mencionados por la jurisprudencia constitucional, a saber:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales^[20] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado^[21].

i. Violación directa de la Constitución.

Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos

supuestos de procedibilidad en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

V. DE LA INEXISTENCIA DE OTRO MEDIO EFICAZ DE DEFENSA

Para la procedencia de la tutela por vías de hecho resulta indispensable el accionante no cuente con otro medio judicial de defensa o que si éste existe, no resulte eficaz. Este requisito de improcedibilidad está fijado en el numeral primero del artículo 60 del Decreto 2591 de 1991. A esta improcedencia la doctrina la denomina el principio de subsidiariedad de la tutela, según el cual únicamente cabe el amparo, dada la inexistencia de un medio alternativo de defensa. Bien vista la norma sobre improcedencia lo que allí se establece es una obligación para el fallador, pues en los casos de existencia de un medio ordinario de defensa, el juez de tutela debe en concreto, examinar si tal medio resulta o no eficaz. En el momento actual, los accionantes no cuentan con otro medio de defensa judicial suficientemente idóneo para enervar los efectos nocivos e ilegales del fallo cuestionado en sede constitucional. En este escrito se sostiene la tesis según la cual el recurso de unificación de jurisprudencia negado por el tribunal agotó el medio eficaz de defensa.

VI. VIABILIDAD PROCESAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La presente acción de tutela es viable por varios motivos:

1º. Observancia de las exigencias básicas del amparo, de acuerdo con el artículo 86 de la C. Pol., desarrolladas por el Decreto 2591 de 1991.

Lo primero por destacar es que indudablemente los aquí accionantes acreditan el cumplimiento del presupuesto de legitimación en la causa por activa para incoar la acción superior por cuanto actúan como sujetos procesales demandados dentro del proceso verbal de pertenencia en donde se les afectó con una decisión de segunda instancia con características de vía de hecho judicial, objeto de la presente tutela, por lo demás caprichosa y vulneradora del

debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, entre otros. Es interpuesta a través del suscrito apoderado especial por las personas **ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO, MERY LUCIA ERASO VARGAS, YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** como demandantes dentro del proceso administrativo de reparación directa, empero, vencidos en la decisión que se tilda de vía de hecho judicial en segunda instancia, ya referida en forma precedente, que contiene defectos fácticos, sustantivo, entre otros.

2º. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales

En segundo lugar, la acción de amparo **va dirigida en contra de la autoridad pública TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA SEGUNDA DE DECISION ORAL, MAGISTRADOS DOCTOR RONALD OTTO CEDEÑO BLUME (PONENTE), DOCTOR JHONK ERICK CHAVES BRAVO, DOCTOR FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ O QUIEN HAGA SUS VECES**, lo que exterioriza el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que se trata de la autoridad judicial que profirió el fallo de segunda instancia objeto de acción de tutela por vía de hecho judicial. Ello por cuanto, como es suficientemente conocido, las autoridades judiciales y sus decisiones no están exentas de ser sujetos de la acción de tutela cuando quiera que, como en el caso de autos, con sus actuaciones u omisiones vulneren o amenacen derechos fundamentales. Tal circunstancia es la que precisamente se verifica en la presente acción por cuanto esa es la autoridad que profirió la sentencia de apelación, confirmatoria de la primera instancia, ya mencionadas y referidas con antecedencia, y por ello es la que debe ser convocada por haber vulnerado sus derechos superiores, en calidad de autoridad pública accionada.

Ahora bien, sobre el tópico de la **inmediatez** para la presentación oportuna del amparo, se tiene que la sentencia cuestionada fue proferida mediante auto sin numero del 30 de Junio de 2023, interponiendo recurso de unificación de jurisprudencia el día 18 de Julio de 2023 que fue resuelto mediante auto sin numero del 7 de Diciembre de 2023 siendo notificado via correo electrónico el día lunes 18 de Diciembre de 20023 y la interposición de la acción superior corresponde antes del vencimiento de los seis (6)

meses al día de hoy que se presenta esta acción de tutela, esto es, no se han superado los seis (6) meses posteriores, plazo que este signatario considera de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Consejo de Estado es razonable frente a la consolidación de la vía de hecho judicial reclamada.

Frente al cumplimiento del requisito de **subsidiariedad**, se tiene que la sentencia objeto de tutela es una segunda instancia de un proceso administrativo que es susceptible de recurso extra ordinario de unificación de jurisprudencia que fue agotado y decidido negativamente sin opción de promover recurso extraordinario adicional alguno.

En lo que atañe a la relevancia constitucional del tema tratado en la presente acción de tutela, es lo cierto que la discusión que aquí se plantea gira alrededor de la violación de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad, entre otros, con un impacto directo en la pérdida del derecho a ser reparados los actores del proceso administrativo donde se produjo la sentencia de segunda instancia tildada de ilegal siendo esta decisión una vía de hecho judicial.

Por último, los hechos constitutivos de la vulneración denunciada como vía de hecho judicial por defectos sustantivo, fáctico, entre otros, están debidamente determinados en la presente acción de tutela, y su singularización permite detectar que la valoración de la prueba fue ostensiblemente contraevidente y el perjuicio es grave porque constituye una afrenta al valor justicia y al acceso a la administración de ella con un desbordado y extraño comportamiento valorativo del Juez accionado dada la precariedad argumentativa que facilitó la construcción de una sentencia que exonera a los demandados de la responsabilidad de indemnizar a las víctimas o demandantes fundada en prueba inexistente en el legajo procesal.

VII. DE LAS ÓRDENES A SER IMPARTIDAS

Conforme con lo expuesto deberá el juez constitucional proceder al amparo de los derechos fundamentales a la

justicia material, debido proceso, defensa, igualdad procesal, y libertad personal, derecho al debido proceso, acceso a la administración de justicia y en consecuencia, deberán ser impartidas las siguientes órdenes:

Que se deje sin ningún efecto legal y/o se declare la nulidad de todo lo actuado desde la emisión de la decisión de segunda instancia aquí denunciada como vía de hecho judicial, inclusive en el proceso materia de la presente acción de tutela.

Se ordenen todas las demás medidas, tendientes a la protección de los derechos fundamentales de los accionantes dentro del proceso contencioso administrativo de reparación directa promovido por **ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO, MERY LUCIA ERASO VARGAS, YINETH CAROLINA PULIDO ERASO** entre ellas la confirmación de la sentencia de primer grado emitida por el Juzgado 21 Administrativo de oralidad de Santiago de Cali Valle del Cauca.

Que de haber mérito para ello, se ordene la compulsación de copias disciplinarias y penales para que se investigue la conducta de los funcionario judiciales tutelados, derivada de la ilegal emisión de la sentencia de segunda instancia aquí acusada como vía de hecho judicial.

VIII. JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto no haber interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos descritos en esta acción de amparo, ni entre las mismas partes.

IX. COMPETENCIA

Le corresponde a la sala de decisión del Consejo de Estado conocer de esta acción conforme a lo dispuesto al artículo 86 de la Carta, el Decreto 404 de 2001, y la doctrina constitucional contenida en el Auto 059 de 2001 de fecha febrero 27 de ese año, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa.

A de más de lo anterior por cuanto la decisión judicial cuestionada proviene del **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA SEGUNDA DE DECISION ORAL**, y la tutela debe interponerse ante su Superior funcional que lo es precisamente la Honorable Sala de Decisión del Consejo de Estado, sección tercera.

X. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Son aplicables: Normas constitucionales: artículos 29, 86 y 250. Normas legales: El Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 404 de 2001. Doctrina constitucional: la contenida en los fallos emanados de la Corte Constitucional, puntualmente reseñados en este escrito, así como el Auto 059 de 2001.

Jurisprudencia: Sentencias del Consejo de estado de la sección tercera sobre riego excepcional. Entre las que destacamos:

Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera sentencia proferida el 16 de Diciembre de 1999, expediente No. 21071. Consejero ponente MAURICIO FAJARDO GOMEZ.

Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera sentencia proferida el 20 de Febrero de 1989 y sentencia del 13 de Julio de 1993 expediente No. 8163. Consejero ponente JUAN DE DIOS MONTES HERNANDEZ.

Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera sentencia proferida el 14 de Julio de 2001, expediente No. 12696. Consejero ponente ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ.

Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera sentencia proferida el 19 de octubre de 1999. Consejero ponente MAURICIO FAJARDO GOMEZ.

XI. ANEXOS:--

1. Sentencia de primera instancia No. 057 del 18 de Mayo de 2021.
2. Sentencia de segunda instancia sin numero de fecha 30 de Junio de 2023, tildada de vía de hecho judicial.
3. Recurso de unificación de jurisprudencia de fecha enviado al **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA** El día 18 de Julio de 2023 a las 06:14 PM.
4. Auto sin numero de fecha 7 de Diciembre de 2023 Por medio del cual se resuelve no conceder el recurso de unificación de jurisprudencia.
5. Trazabilidad del numeral anterior que prueba que la notificación del auto referida en el numero 4 se realizo por correo electrónico que llego el día 18 de Diciembre de 2023 a las 5:22 PM.
6. Link para acceder al expediente digital del proceso administrativo por reparación directa identificado con el radicado 76001-33-40-021-2017-00048-01 Donde se visualiza todo el proceso de la sentencia tildada de ilegalidad https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsamaijca.consejodeestado.gov.co%2FVistas%2FCasos%2Flist_procesos.aspx%3Fguid%3D760013340021201700048017600123&data=05%7C01%7C%7Cc68fda6a67c444534e1808db83ac189f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638248547715854040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWlloiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzliLCJBtil6lk1haWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7JnAMobG5zg6pfzG0V4%2B%2FLUcVyKKI4urKcWP1ZKpDZI%3D&reserved=0

XII. NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

PARTE ACCIONADA:

La entidad en tutelada, **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA SEGUNDA DE DECISION ORAL** las recibirá en su sede pública ubicada en la ciudad de Santiago de Cali Valle del Cauca en la dirección calle 11 No. 434, barrio San Pedro, suficientemente conocida por el Consejo de Estado o en el correo electrónico sgtadmincli@notificacionesrj.gov.co o el ampliamente conocido por el consejo de estado.

PARTE ACCIONANTE:

ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO en el email dcmcarolina@outlook.com , celular +57 3175375849.

MERY LUCIA ERASO VARGAS en el email dcmcarolina@outlook.com , celular +57 3175375849.

YINETH CAROLINA PULIDO ERASO en el email dcmcarolina@outlook.com , celular +34 672075281.

ANDRES FELIPE RIVAS JIMENEZ en el email felipe_rivas2008@hotmail.com o en la secretaria del despacho.

Sin otro particular y con la debida atención se suscribe de los Honorables Consejeros,

Atentamente,



ANDRES FELIPE RIVAS JIMENEZ.

C.C. No. 6´333.916 de Jamundí (V).

T.P. No. 49.169 del C.S. de la Judicatura

Email: felipe_rivas2008@hotmail.com